

Adiós conservadurismo; bienvenido liberalismo. La nueva derecha en el Perú

Lauer, Mirko

Mirko Lauer: Periodista peruano. Poeta. Uno de los directores del diario La República, del cual es el editorialista principal. Director de la editorial «La Mosca Azul». Es autor de varios libros de poesía, entre ellos «Sobrevivir», editado en La Habana y Lima. Se ha dedicado últimamente a la Teoría del Arte.

Los esfuerzos intelectuales por introducir en Perú ideas y prácticas modernizadoras del capitalismo, en un sentido liberal, han empezado a cuajar en núcleos de actividad política. Sin embargo, la derecha política y empresarial peruana no parece interesada seriamente en una modernización de este tipo. En tal medida, el auge de figuras como Hernando de Soto o Mario Vargas Llosa expresa sólo una necesidad coyuntural de Acción Popular y el Partido Popular Cristiano frente al régimen aprista, y no la voluntad de asumir el liberalismo político y económico a cabalidad. Esto implicaría renunciar a la protección y subsidio tradicionales de un Estado que muchos consideran insustituibles para el llamado «capitalismo enano» de Perú.

Desde hace unos siete años viene desarrollándose en Perú un núcleo de pensamiento y actividad al que es posible percibir como una derecha distinta de la que hasta ahora ha ocupado esa porción del espectro político. Su propósito es modernizar el capitalismo peruano a través del liberalismo, y sus consignas son el rescate del tiempo perdido en la polémica de ideas con la izquierda y el populismo aprista, el adosamiento de un mensaje político al discurso económico liberal, y la separación de la idea de derecha de la de conservadurismo ante la opinión pública. Es improbable que esta nueva derecha desplace a la tradicional de los partidos y el empresariado en un futuro cercano, pero es un hecho que ella ha empezado a influir en la conformación de la imagen global de la derecha en Perú, y a competir con ella dentro y fuera del ámbito de lo derechista. Un signo importante es el atractivo que

las nuevas ideas empiezan a tener para los jóvenes universitarios en muy variadas especialidades.

Esta nueva derecha ha venido intentando mantener relaciones distantes con la derecha política establecida y agrupada en los partidos Acción Popular (fundado en 1956) y Popular Cristiano (escindido de la Democracia Cristiana en 1966), pero una vez lanzadas sus propuestas a la arena política por el escritor Mario Vargas Llosa y su movimiento Libertad, esta distancia se ha podido mantener sólo a medias. Hubo un momento en 1987 en que vieja y nueva derecha se necesitaron una a otra, pero luego se han ido volviendo a evidenciar diferencias entre lo que son dos maneras de mirar y de vivir el derechismo en Perú.

Dentro de la vieja derecha también hay diferencias sustantivas que han tenido y tendrán que ver con el destino político de las nuevas propuestas. La postulación de una economía social de mercado por parte del PPC lo ubica claramente en una derecha democristiana, mientras que AP llegó dos veces al gobierno (1963, 1980) con un ideario y un programa de centro-derecha, que luego las circunstancias depuraron hacia un derechismo mucho más liberal en lo económico, y señorial en términos de cultura política.

Pero la diferencia más importante de la antigua derecha respecto de la nueva es la conciencia de que todo el aparato productivo del gran capital en Perú depende de la protección estatal, desde el siglo pasado, y que la introducción de una regla de juego abierta, con libre competencia interna, la posibilidad de quiebras, un mercado no monopolizado y el desafío real de una competitividad internacional trastocarían lo que el historiador Pablo Macera ha llamado en 1987 «el capitalismo enano de los peruanos».

El programa no escrito de la nueva derecha - hoy conformada sobre todo por el movimiento Libertad, el Instituto Libertad y Democracia (ILD) de Hernando de Soto, y grupos académicos y profesionales liberales - empieza por la modernización económica y administrativa del soporte empresarial y político de la propia derecha, e incluye la crítica del Estado por principio (y no sólo a partir de los resultados de su gestión), el reclamo de reglas de juego políticas que mitiguen las líneas clasistas populares en nombre de un pragmatismo, el nuevo énfasis en la importancia de elaborar en el terreno las ideas de fondo sobre la identidad nacional (como intentó hacerlo la derecha en los años 10 y 20), y la exigencia de que se reconozca que la esencia de la naturaleza humana es el egoísmo individualista, que los sectores menos humanistas de la burguesía llaman «libertad» en abstracto.

El rostro más conspicuo de esta nueva derecha, Vargas Llosa, hace esfuerzos por ser vocero y candidato de todas las derechas del país; pero la figura más destacada del nuevo fenómeno, Hernando de Soto, autor del promovido best-seller continental *El otro sendero*, ha preferido mantenerse aparte de la derecha agrupada en los partidos y los gremios empresariales, para la cual llega a tener incluso argumentos y adjetivos duros. A las pocas semanas de que Vargas Llosa fundó Libertad, De Soto se apartó del movimiento por desavenencias personales y discrepancias políticas. Hoy son las ideas traídas por De Soto las que con más eficacia buscan el restablecimiento de una nueva versión del liberalismo económico de tipo *laissez faire*, que en los años 50 proponía Pedro Beltrán como parte de una defensa de los terratenientes agroindustriales. La contradicción entre lo que el economista Beltrán proponía y lo que sus seguidores políticos y empresariales hacían, es algo que no parece haber preocupado a De Soto hasta el momento, a pesar de que ello está en la base del éxito o fracaso posible de sus propuestas en el país.

Un aspecto adicional que hace a la derecha de De Soto y Vargas Llosa diferente de las de los años 50 y de la actual, es su voluntad de dar la pelea por recuperar los espacios intelectuales y sociales ganados por las posiciones de izquierda populista y radical en los últimos decenios. Los partidos no han demostrado el menor interés en estos temas, finalmente vitales para contrarrestar la pérdida de legitimidad y hegemonía política de cualquier posición en el juego democrático. La necesidad de un *aggiornamento* de la derecha había sido advertida por De Soto a fines de los años 70, cuando fundó el ILD con participación de Vargas Llosa y algunos empresarios, para investigar y elaborar nuevas propuestas políticas.

Sin embargo, la parte académica de la recuperación de un pensamiento de derecha liberal en Perú se dio toda fuera del ILD, en el terreno de la importación, difusión y aplicación de teorías económicas y disciplinas administrativas de ese signo.

Reacción liberal

La expansión del Estado bajo Velasco había producido una reacción económica liberal entre los empresarios, sobre todo a partir del momento en que empezaron a agotarse las posibilidades de ganancia dentro de aquel modelo protector, pero controlista y dirigista. Pero el liberalismo económico de aquella reacción no prosperó, entre otras cosas porque las propuestas militares fueron atribuidas al militarismo en abstracto, en beneficio de una derecha que estaba proponiendo a la burguesía mayores libertades políticas y ventajas coyunturales para sus negocios, mas no cosas muy distintas respecto de la asignación de recursos en la estructura económica.

La intención del recambio fue quedarse con la protección y el subsidio, pero deshacerse de los controles, lo cual en parte ocurrió con los gobiernos de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y Fernando Belaúnde (1980-1985). El liberalismo, como mensaje social y herramienta política de la derecha, aparece recién en la segunda mitad de los años 80, para enfrentar a un Estado en manos de Alan García y el Partido Aprista, cuando el gobierno intenta ampliar el tradicional subsidio del Estado a nuevos sectores del capital.

El mensaje económico liberal como propuesta política se inició tímidamente en algunas universidades privadas y empresas de asesoría intelectual para empresarios, y fue puesto a prueba entre 1978 y 1985. En esos siete años se intentó en un par de momentos tomar decisiones políticas de rentabilidad del capital a expensas de los intereses creados de la estructura productiva local, sumamente protegida, lo cual se hizo en nombre de una eficiencia económica que abrió las puertas a las importaciones. En esto fueron iguales las políticas de la última parte del gobierno de Morales Bermúdez y el segundo Belaúnde. Sin embargo, esta fórmula fracasó, al no modificar la estructura productiva, entre otras cosas porque tampoco logró sacudirse de la deuda-adicción. A partir de allí el auge social de los sectores medios y populares incubado por las reformas velasquistas y los cambios demográficos se convirtió en las victorias de Izquierda Unida y el Apra en las elecciones de 1983, 1985 y 1986. Cabe añadir que el Apra ya había obtenido una mayoría simple en las elecciones de 1979.

La crisis de los partidos de derecha, derrotados en tres elecciones consecutivas, y que incluyó una falta de confianza en ellos por parte de los sectores empresariales que habitualmente los habían apoyado, y que en 1985 se colocaron detrás del candidato Alan García (al que en la alegría del triunfo el líder de la CONFIEP, el gremio de los empresarios, ofreció «apoyo total, por el momento»), produjo en ellos un vacío de poder, y la necesidad, la posibilidad, de un nuevo discurso, que reuniera en una sola propuesta al liberalismo económico con el liberalismo político.

Vargas Llosa fue la persona ideal para intentar esa transición: su experiencia académica inglesa y la influencia intelectual de De Soto lo habían puesto en contacto con las ideas políticas liberales, y su actuación al frente de la comisión investigadora de la masacre de ocho periodistas en Uchuraccay (1983) lo había convertido en una figura prominente de la derecha peruana. Belaúnde le ofreció el premierato en 1984, pero aquella vez De Soto convenció al escritor de la conveniencia de mantenerse distante de AP.

Otro sendero

El lanzamiento de *El otro sendero* a fines de 1985 marcó el final de la concentración exclusiva de los esfuerzos académicos de la nueva derecha en lo económico y administrativo, para pasar a disputar el monopolio de la izquierda en la elaboración de mensajes políticos desde la investigación en ciencias sociales, sobre todo para hacer la crítica al Estado populista. La crítica tradicional al Estado peruano desde la derecha había enfocado exclusivamente su supuesta ineficiencia como competidor del sector privado y lo costoso de los esfuerzos populistas de utilizarlo como instrumento de redistribución a través del subsidio. La ventaja de este argumento era ocultar que el sector privado es otro producto subsidiado por el Estado, es decir, por sus contribuyentes.

De Soto de algún modo denuncia el viejo argumento, y le da la vuelta al insistir en un carácter antipopular del Estado, en cuanto el trámite burocrático frena las iniciativas del pueblo, descrito ya no como conjunto de pobres, sino como sector privado popular; asimismo extiende sus críticas a las formas de articulación tradicional del capital con el Estado, en las modalidades de rentismo que él llama mercantilistas. De hecho, el rentismo ha sido un rasgo central de la economía peruana desde la Colonia, básicamente porque nunca hubo el menor interés político en acabar con él. Sin embargo, en los años 80 otros economistas ortodoxos, como Roberto Abusada, dudan de que esa sea la traba sustancial en el proceso de desarrollo económico.

Para tratar de dar consistencia social a esta nueva crítica al Estado, De Soto presenta a una parte de las víctimas de la versión peruana del capitalismo - los desempleados sin acceso a servicios públicos y recursos significativos del mercado, que conforman la porción mayor de lo que él llama informales - como sus potenciales salvadores, mediante una cruzada liberal contra el orden económico-social populista de Estado fuerte e industria subsidiada, en proceso de consolidación desde el primer belaundismo (1963-1968). La propuesta política implícita en esto es que la línea de confrontación en la lucha social de Perú oponga al Estado y su burocracia a todo lo demás. Pero a la vez el libro de De Soto carece de una propuesta acerca de cómo despegar a los burgueses rentistas de las tetas estatales. Al contrario, ellos se vuelven productores por el mismo principio de *pars prototo* que allí convierte a los pobres en empresarios.

A partir de una convicción respecto de la homogeneidad de categorías abstractas como el Estado y los informales, De Soto desarrolla argumentos de este tipo: 1. Los informales crean riqueza sin respetar las normas del Estado (no se llega a decir, pero se sugiere que sin Estado). 2. Los problemas para crear mayor riqueza se deben al Estado. 3. Mejor sería vivir sin Estado y sin sus parásitos rentistas.

Este tipo de argumento económico-social simple es el que luego Vargas Llosa extrapola hacia la política, añadiéndole una versión del Estado como limitado, y potencial cancelador de las libertades individuales. El Estado en el Perú actual es presentado como el domicilio histórico de los políticos, definidos en varias oportunidades como una especie «corrupta», y en esa medida la antesala del totalitarismo. La libertad que propone Vargas Llosa aparece estructurada dentro de los grandes rasgos de la democracia representativa, pero opera como desconfianza esencial en sus instituciones, sobre todo la del propio Estado nacional, en lo que ha sido descrito como un anarquismo de derecha. En el fondo, se trata del reciclaje permanente de los argumentos que rodearon la pugna Estado-sector privado en ocasión del intento de Alan García de estatizar el sistema financiero privado peruano en agosto-septiembre de 1987, y que Vargas Llosa realiza, a falta de mejores argumentos, como una forma de tratar de reeditar su vigencia política de aquel año. Estamos ante un planteamiento primitivo y frágil, que caricaturiza al Estado, incluso desde la perspectiva de una filosofía política liberal.

La coyuntura

Pero aun en su mejor hora, la iniciativa de Vargas Llosa a favor de los propietarios de los bancos no fue todo lo consensual que él hubiera deseado. Belaúnde, que había denunciado a los «latifundios del dinero» y ofrecido una «revolución del crédito» en un libro de 1956, mantuvo un perfil bajo en esa movilización, al extremo de no asistir al exitoso mitin de Libertad, donde Vargas Llosa tuvo que contener las consignas golpistas de una masa de clase media más interesada en defender la propiedad que la libertad. Es probable que Belaúnde se haya mantenido aparte por estimar que la movilización de Vargas Llosa ocurría demasiado temprano, demasiado a la derecha y demasiado a contrapelo de los estilos políticos locales. Poco tiempo antes le había recomendado al escritor que no fundara todavía Libertad y que esperara un poco para lanzar la iniciativa unitaria Frente Democrático, FREDEMO, que intenta agrupar a AP, PPC y Libertad.

No es casual que estos nuevos planteamientos sobre el Estado, la libertad y los sectores marginalizados por la economía capitalista del país hayan aparecido en la

misma coyuntura histórica en que los poderosos y los privilegiados empiezan a sentir que el manejo directo, no negociado ni compartido, del Estado, se les escapa de las manos por falta de suficientes senadores y diputados, y por ausencia de un sistema eficaz de lobby en el Congreso. Hasta ese momento, la derecha no había tenido mayor problema real con el manejo, la presencia o el volumen del Estado, al extremo de que en su segundo período (1980-1985) Belaúnde no redujo el déficit fiscal ni la injerencia estatal, ni privatizó una sola empresa pública significativa. La imposibilidad de un partido populista o izquierdista de llegar al control del Ejecutivo y el Congreso, había ido postergando el problema de representación en la interesada conciencia de las diversas fracciones de la burguesía.

La nueva defensa de la propiedad privada tiene dos rostros: la búsqueda de un restablecimiento de la unidad política de la derecha partidaria con los gremios empresariales sobre bases diferentes, y el enfrentamiento de la noción de propiedad individual popular (bajo la especie de informalidad) a las nociones de trabajador, proletario o propietario colectivo promovidas por el Apra y la izquierda. En ambos casos, la idea de fondo es la recuperación del control del Estado desde la sociedad misma, una propuesta que, al no reconocer las diferencias inherentes a la estructura económica y social del país, deja abierta la puerta al darwinismo social radical, en cuanto propicia un corte unilateral de los acuerdos históricos entre el Estado y la sociedad en el Perú de este siglo, vigentes, por lo menos en la forma, desde la avanzada legislación social de los años 30.

La propuesta de la nueva derecha a los empresarios, y que es la que le impedirá prosperar entre ellos apenas éstos terminen de superar su crisis de relación con el gobierno aprista, es la suspensión del proteccionismo integral, a cuya sombra subsiste hasta hoy el capitalismo privado en Perú, y que lo debilita. A esto aluden también la áspera crítica de De Soto a los rentistas que reemplazan la eficiencia productiva con el favor político y los ataques de Vargas Llosa a un keynesianismo que identifica con un estatismo a cien por ciento.

El rostro que se presenta a los trabajadores es la propuesta de un abandono de la contienda, o aun la negociación, desde un ángulo clasista, en nombre de una lucha en defensa de sus propiedades y el derecho a ejercer la libre empresa, es decir, sin trabas burocráticas. El otro sendero alude a cosas como la vivienda sin titulación de las barricadas, al derecho al comercio ambulatorio, al derecho a un trámite mínimo para constituirse en empresarios formales, o aun al derecho de vincularse libremente al mercado de trabajo en condiciones de desventaja. El concepto de propiedad adquiere así un carácter universal por fuera del Estado.

El Estado

Las condiciones de vida en la pobreza peruana son ofrecidas por el ILD como argumento para que las mayorías defiendan la porción privada del orden económico establecido, que es presentado a su vez por Vargas Llosa como sustento de la libertad. Por el camino se olvida que el Estado en Perú ha crecido en manos de las capas medias precisamente para tratar de compensar las insuficiencias del propio sector privado. De Soto resuelve este problema argumentando que lo que ha tenido Perú no es capitalismo propiamente dicho, sino rentismo mercantilista únicamente. Lo cual no le impidió en 1987 salir a la plaza pública a sostener que los dueños de los bancos, que uno supondría sospechosos de rentismo y mercantilismo, eran simplemente una versión de los comerciantes ambulatorios informales.

Sin embargo, De Soto ha identificado sentimientos y aspiraciones que son reales también entre los sectores populares. Con la burocracia central, las fuerzas armadas y policiales y numerosas empresas que dan cuenta de la mayor parte de la producción nacional, empleando al 15 por ciento de la PEA, y con la burocracia central hoy sindicalizada, el Estado peruano es el primer patrón del país, y el principal blanco de las luchas reivindicativas. Además, es la única fuente de servicios sociales en un país donde estos son escasos, lo cual también ayuda a que los sectores populares lo perciban como un enemigo, a pesar de la declarada vocación redistributiva de los regímenes populistas.

A lo anterior debe añadirse que el estatismo y el colectivismo como caminos ciertos hacia una situación más próspera en una sociedad más justa han perdido terreno en la ideología popular de estos años, también en Perú. Por eso la propuesta del ILD nace de la identificación de espacios de la sociedad donde Apra e izquierda no estaban actuando, ni estaban interesados en actuar. Me refiero al naciente interés del pueblo por defender un espacio privado en una sociedad donde lo público le es expropiado por el populismo, a menudo en nombre del colectivismo. La defensa del pobre como propietario y empresario aparece como una posibilidad estratégica, en torno a un prestigio real de la práctica de la propiedad y el sentimiento individualista entre sectores del pueblo. La oportunidad de poner a prueba esta estrategia llegó en agosto de 1987, con la propuesta de García para estatizar las finanzas privadas.

La banca

El proyecto de estatización de los bancos privados fue el tipo de medida que en los años 70, bajo el régimen de Velasco, o aun el de Morales Bermúdez, hubiera recibido todo el apoyo de la izquierda política y las organizaciones laborales. Pero entre 1987 y 1988 la medida naufragó entre la resistencia de IU a apoyar una medida que socavaba sus opciones electorales para 1990, la desconfianza popular a partir de la prédica libertaria de los medios de comunicación en manos de la derecha, la indolencia de los viejos senadores del Apra, que vieron allí la oportunidad de un retorno al primer plano político a expensas de la nueva generación (lo cual de hecho sucedió) y un tipo de resistencia nueva desde la derecha, que se lanzó a las calles, como en 1974, cuando Velasco tomó los diarios limeños.

En un clima de rechazo de la clase media, reforzado por los medios de comunicación privados, y de indiferencia de las dirigencias de IU, Vargas Llosa empezó su blitz en defensa de las libertades amenazadas por el Estado populista peruano, presentado ya no como el ogro filantrópico a que se refiere Octavio Paz para criticar al Estado priísta mexicano, sino como un ogro misántropo al borde del totalitarismo, a pesar de su carácter democrático representativo. El mensaje y la figura del escritor sintonizaron perfectamente bien con el estado de ánimo y las necesidades de las clases media y alta en ese momento: defender la propiedad privada amenazada por la medida y las libertades que sentían limitadas por la actuación del Estado populista.

El mitin de Libertad del 21 de agosto de 1987 fue la mayor congregación de masas de la derecha desde el cierre de la campaña electoral de Belaúnde en 1980, e inició la recuperación de la derecha en las encuestas. AP y PPC habían obtenido 7,2 por ciento y 15 por ciento respectivamente en las elecciones de 1985; la movilización de Vargas Llosa y Libertad en los medios y en las calles pronto tuvo una aprobación próxima al 50 por ciento. A partir de allí, Vargas Llosa planteó, desde una posición de fuerza, la unidad de su movimiento con AP y PPC, como parte de una nueva forma de unidad de la derecha política entre sí y con el empresariado.

Nuevo rostro

El repunte de la derecha en el escenario político del segundo semestre de 1987 no fue visto por el Apra y la Izquierda Unida como algo particularmente preocupante. Sin embargo, aquella derecha, que parecía políticamente liquidada por sus pasadas derrotas electorales, logró aglutinarse en una actividad común de defensiva estra-

tégica, duplicar su porcentaje en las encuestas de popularidad política, al grado de disputarle al Apra el segundo lugar en agosto de 1988 (antes del programa de ajuste de septiembre), e incursionar con cierto éxito en la ocupación de espacios sociales.

Todo ello se logró en base al empleo de la ética (y la estética) de la nueva derecha, como punta de lanza de una estrategia conjunta de toda ella. Los elementos claves aportados por la nueva derecha fueron: nueva imagen (Vargas Llosa), nueva propuesta (defender la propiedad de los ricos y los pobres por igual) y nueva actitud frente al Estado.

La manera vacilante como fue manejada desde el gobierno la pretendida estatización del sistema financiero permitió a la derecha ampliar la cuña que ya existía entre el Apra e IU, y romper así, dentro y fuera del Congreso y del partido de gobierno, la alianza tácita que mantenía la hegemonía de las ideas populistas y nacionalistas en el país. Esto se realizó sobre todo en base a una movilización de masas de la clase media alta y a una millonaria inversión en los medios de comunicación, que lograron la neutralidad de la izquierda, en base al antigobernismo a que la movían - sobre todo - sus intereses electorales.

En esta primera etapa de su estrategia, la derecha logró reintroducir la legitimidad del discurso económico del gran capital frente al discurso político de las capas medias, incentivar una discreta pero eficaz desobediencia civil de los dueños de los medios de producción, establecer cabezas de playa como competidora de IU y el Apra en el ámbito social, y acelerar el proceso de cuestionamiento público de la vigencia democrática mediante el manejo de la noción de catástrofe. Al haber perdido el manejo del Estado democrático, le enfrentó la idea de una libertad en peligro y una sociedad en crisis. Esto a pesar de que la institucionalidad democrática continuó su vigencia y funcionamiento habituales.

Todas estas cosas ocurrieron entre mediados de 1987 y comienzos de 1988. A partir de allí la derecha inició una nueva etapa estratégica, que se apoya en la idea de que una aceleración de la descomposición institucional ampliará todavía más la brecha entre los dos bloques populistas y nacionalistas en el país, permitiendo un «golpe sin golpe»: el acorralamiento del régimen, al extremo de imponerle el programa de la propia derecha. Ejes fundamentales de esta aceleración han sido el esfuerzo de liquidación política de la figura del presidente Alan García (que supone el abandono de reglas de juego señoriales tradicionalmente promovidas por la derecha en la polémica democrática), el paso de la breve alianza táctica con la izquierda forjada

en 1986 a un anticomunismo rampante, y la colaboración de aquellos sectores del gobierno, o próximos a él, empeñados en un retorno suicida a las fórmulas económicas ortodoxas de 1980-1985.

Segunda etapa

Las marchas y los comunicados de empleados bancarios en contra de la estatización, la protesta de los trabajadores de la planta industrial lechera Perulac (Nestlé) por la intervención estatal, el cierre de pequeños comercios propuesto por la Confederación de Comerciantes (CONACO) o el comunicado en que la Federación de Choferes del Perú colocó sus paros escalonados bajo la tutela ideológica del ILD, son algunas muestras de la nueva capacidad política de la derecha para volcar en beneficio suyo el descontento popular contra el Estado, al mismo tiempo que obliga al gobierno a asumir posturas cada vez más impopulares.

Esta segunda etapa estratégica de dos caras - una que pide contra el pueblo y otra que pide a favor de él - es posible porque la derecha en su conjunto lleva la iniciativa política en el país y combina el mensaje de las libertades y la propiedad pauperista con el mensaje darwinista de la eficiencia económica en abstracto. Sería más correcto a estas alturas llamar nueva derecha al conjunto de las ideas y acciones de esta posición, articulados en una estrategia común, aunque todavía las ideas de De Soto y la actuación de Vargas Llosa parecen haber sido aceptadas por los partidos más como una necesidad coyuntural que como una salida política viable.

Esta ambigua recepción de lo nuevo es por la incapacidad de dichas actitudes para asumir una forma política organizativa que sea algo más que la actuación de una figura destacada a la cabeza de un club fabiano, dependiente de la infraestructura de los partidos. El eventual despegue del FREDEMO dependerá de la capacidad de este último sector para crecer o supeditarse, según como le vaya en los meses que faltan para las campañas municipales de 1989. Hasta ahora, el FREDEMO sólo es un concepto que cubre las apariciones públicas conjuntas de Luis Bedoya Reyes (líder del PPC), Belaúnde y Vargas Llosa, y su otra forma de existencia son 40 comisiones tripartitas abocadas a la desigual confección de un plan de gobierno.

AP recién se está empezando a recuperar de su caída en las elecciones generales de 1985, cuando el PPC obtuvo su habitual 15 por ciento. Libertad ha perdido mucho aliento desde su lanzamiento en 1987, sobre todo por una falta total de liderazgo efectivo, y hasta hace poco se apoyaba en el segundo lugar de su líder en las encuestas de popularidad de Lima. La derecha confía en la caída definitiva de la po-

pularidad del presidente García y del Apra, y considera a IU su principal rival para 1990. Pero en los hechos la derecha tiene que derrotar al Apra para entrar a una segunda vuelta contra IU.

Cuando se puso en marcha el FREDEMO en 1987, Vargas Llosa, la estrella incuestionada del movimiento contra la estatización del sistema financiero, parecía el candidato natural para una derecha unida en 1990. Pero a poco más de un año de distancia, estamos presenciando un retorno del sentimiento partidista de las bases, tanto entre la militancia de AP y PPC, como de ambos partidos frente al recién llegado Libertad. Esto se ha visto reforzado entre los belaundistas en cuanto su líder ha venido recuperando terreno en las encuestas de popularidad.

Una encuesta Datum de popularidad política hecha a mediados de agosto de 1988, antes del inicio del programa de ajuste, ubica a Belaúnde en tercer lugar, con el 40 por ciento, después de Alfonso Barrantes (59,3 por ciento) y el aprista Luis Alva Castro (41,5 por ciento). Vargas Llosa figura en quinto lugar, con 31,5 por ciento. Parece, pues, que el liderazgo de las ideas nuevas que representan Vargas Llosa y De Soto va camino de ser un recurso coyuntural del capital en Perú. Falta saber ahora si la presencia de estas ideas en la propuesta derechista es un rasgo permanente o descartable.

En lo esencial la nueva derecha ha sido un intento de ir contra la corriente del desarrollo social peruano de los últimos decenios, al cual la derecha - política, empresarial, ideológica - se ha adaptado en lo fundamental. Para imponerse al país, el liberalismo económico y político tendría que imponerse primero a la propia derecha. De hecho, los tímidos intentos de un sector belaundista de imponer principios económicos liberales a comienzos de los años 80 encontraron entre los empresarios casi tantas resistencias como los intentos velasquistas de racionalizar la economía diez años antes.